

## La *periferialización* del conflicto armado colombiano (2002-2014)<sup>1</sup>

Jerónimo Ríos Sierra<sup>2</sup>

Recibido: 7 de abril de 2016 / Aceptado: 2 de agosto de 2016

**Resumen.** El propósito de este trabajo es el de profundizar en un proceso que, definido como *periferialización*, explica alguno de los cambios espaciales que ha experimentado la violencia derivada del conflicto armado en Colombia entre los años 2002 y 2014. Unos cambios, especialmente focalizados en el nororiente y el suroccidente del país, es decir, sobre escenarios muy alejados de los centros decisorios del país, que presentan menores niveles de desarrollo económico y social, pero con un valor estratégico importante debido a la presencia de cultivos ilícitos o de mayor activismo guerrillero. De este modo, la geografía política se reivindica como disciplina de análisis, habida cuenta de las posibilidades que ofrece tanto para la comprensión de las dinámicas de la violencia como de las posibilidades de construcción de paz, sobre todo, habida cuenta del actual proceso de diálogo con las FARC y el ELN.

**Palabras clave:** Colombia; conflicto político; guerrilla; FARC; ELN.

### [en] The *Peripheralization* of Colombian Armed Conflict, 2002-2014

**Abstract.** The purpose of this work is to reflect on a process defined as peripheralization, that explains the spatial changes experienced by the violence of the armed conflict in Colombia between 2002 and 2014. These changes focus on the northeast and the southwest. That is, scenarios away from the decision-making centers in the country, which have lower levels of economic and social development, but with an important strategic value for the presence of illicit crops or greater guerrilla activism. Thus, Political Geography is claimed as a discipline that facilitates understanding of the dynamics of violence and the possibilities of peace building, especially given the current process of dialogue with the FARC and ELN.

**Keywords:** Colombia; political conflict; guerrilla; FARC; ELN.

### [pt] A *periferialização* do conflito armado colombiano (2002-2014)

**Resumo.** O objetivo deste trabalho é aprofundar em um processo, definido como *periferialização*, que explica algumas das mudanças espaciais da violência decorrente do conflito armado na Colômbia

<sup>1</sup> Este artículo se realizó en el marco del proyecto de investigación “Espacio y violencia en Colombia, 1998-2013. Dinámicas para entender la guerra y la construcción de paz” aprobado por la Universidad EAN, Colombia, Acta 041-2016.

<sup>2</sup> Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad EAN (Colombia).  
E-mail: [jeronimo\\_rios@hotmail.com](mailto:jeronimo_rios@hotmail.com); [jriossie@universidadean.edu.co](mailto:jriossie@universidadean.edu.co)

entre 2002 e 2014. Algumas mudanças, especialmente com foco no nordeste e sudoeste do país, ou seja, em cenários distantes dos centros de decisão do país, que têm níveis mais baixos de desenvolvimento econômico e social, mas com um importante valor estratégico como uma presença de culturas ilícitas ou mais de ativismo da guerrilha. Assim, a geografia política é reivindicada como uma disciplina de análise, dadas as possibilidades tanto para a compreensão da dinâmica da violência e as possibilidades de construção da paz, especialmente tendo em conta o processo atual diálogo com as FARC e o ELN.

**Palavras-chave:** Colombia; conflicto político; guerrilha; FARC; ELN.

**Sumario.** Introducción. 1. Marco teórico y conceptual. 2. De la estrategia envolvente sobre el centro a la *periferialización* de la violencia. 3. La *periferialización* de la violencia en Colombia. 3.1. Escenarios tradicionales de retaguardia guerrillera. 3.2. Escenarios alejados de la Política de Seguridad Democrática. 3.3. Escenarios de mayor violencia estructural. 3.4. Escenarios coccaleros y corredores estratégicos. 3.5. La afectación paramilitar. Conclusiones. Bibliografía.

**Cómo citar:** Ríos Sierra, Jerónimo (2016) “La *periferialización* del conflicto armado colombiano (2002-2014)”. *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, vol. 7, núm. 2, 251-275.

## Introducción

El siguiente trabajo tiene como principal propósito profundizar en una de las dinámicas espaciales más importantes experimentadas por la violencia derivada del conflicto armado colombiano en los últimos años: la *periferialización*. Es decir, el enquistamiento de la violencia derivada de la acción guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este fenómeno, que existe desde los mismos orígenes del conflicto, sin embargo, en los años noventa va incorporando dosis de centralidad, como consecuencia de la fuerza creciente que, paulatinamente, van experimentando las guerrillas a la vez que el Estado transcurre bajo ingentes niveles de debilidad institucional. No obstante, un punto de inflexión en el cambio de correlación de fuerzas y, en extensión, en la vuelta a la *periferialización*, con motivo de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y su forma de concebir la superación del conflicto a partir de una política de mano dura. Es decir, la Política de Seguridad Democrática (PSD) fue el instrumento que, por antonomasia, buscaba disputar el poder a las guerrillas mediante la confrontación armada directa, permitiendo con esto eliminar cualquier atisbo de centralidad y llevando a las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN, nuevamente, hacia la guerra de guerrillas y hacia enclaves alejados de los centros políticos y financieros del país. Dicho de otro modo, fruto de lo anterior es que, con el paso de los años, y especialmente en la actualidad, son departamentos muy alejados del centro y mayormente fronterizos, los que en la actualidad se erigen como los principales contextos de presencia e influencia de unas guerrillas que han terminado por descartar la presencia en enclaves urbanos como forma de lucha contra el Estado.

Sin embargo, conviene precisar que la *periferialización* no es solo geográfica o fronteriza. Lo es también social y económica, en la medida en que los mayores niveles de activismo guerrillero coinciden con los mayores rezagos en cuanto a desarrollo y prosperidad económica y social. Lo anterior, puede entenderse como resultado de un Estado profundamente centralizado que, en la última década, a la vez que disputa el poder militar y el control territorial a las guerrillas concibe la paz

como ausencia de guerra y no como la supresión de las condiciones sociales, económicas y culturales que durante tantas décadas sostuvieron dicha guerra. Asimismo, la PSD se erigió sobre la base de priorizar unos enclaves regionales, del centro y del norte geográfico del país —en algunos casos, en connivencia con el paramilitarismo—, a costa de relegar otros, como en el nororiente o el suroccidente, en donde la violencia derivada del conflicto no solo presenta tendencias inalteradas sino, más bien, en muchos casos, crecientes.

Para analizar todo lo anterior, se toman como valores de análisis la base de datos sobre la violencia derivada del conflicto armado colombiano, facilitada por el Observatorio sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH), vinculado hasta 2014 a la Vicepresidencia de la República<sup>3</sup>. Asimismo, se recurre a la base de datos sobre cultivo y erradicación de plantaciones de coca puesta a disposición por UNODC. La base de datos para los indicadores oficiales socio-económicos fue favorecida por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y complementada por los datos oficiales del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Conviene precisar, no obstante, que todo trabajo de estas características incorpora una complejidad metodológica que merece la pena reconocer. Es decir, un trabajo como el planteado, entraña dificultades metodológicas, principalmente, por la dificultad de *operacionalizar* ciertas variables como son el control paramilitar, el activismo guerrillero o su presencia municipal. Así es que, en primer lugar, la violencia guerrillera se entiende en los términos más puramente *galtungianos* de violencia directa, es decir, comprendida como la violencia manifiesta, y en este caso, expresada en indicadores integrados dentro de las lógicas propias del conflicto colombiano como son el número de actos violentos o los combates unilaterales protagonizados por las guerrillas.

Evidentemente, esto supone dejar por fuera otros aspectos latentes que acompañan a la misma noción de violencia, en tanto que no manifiestos y que, expresados por el propio Galtung (2003a), responden a las nociones de violencia cultural o violencia estructural y que ya han sido recogidos por no pocos trabajos que, precisamente, señalan la dificultad añadida que supone medir la violencia o el control territorial en el marco de conflictos armados (Kalyvas, 2006, 2008; Arjona, 2008). Lo anterior, sobre todo, porque cuanto más consolidado es el control territorial, menor es la necesidad de recurrir a la violencia.

Con base en lo expuesto, se asume una posición netamente positivista, determinada, por un lado, por el propio objeto de estudio, y por otro, por tratarse de la metodología seguida por buena parte de los trabajos que, con mayor relevancia, como éste, estudian las dinámicas de violencia de los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto (PNUD, 2003; Echandía, 2006; Salas, 2010; Bechara, 2012). Una posición positivista que terminaría por entender la violencia directa en términos de acciones armadas guerrilleras, por un lado, y que comprende, por tanto, que la presencia municipal se reduce, precisamente, a siempre y cuando, en un munic-

---

<sup>3</sup> También son facilitadas por el ODHDIH la mayoría de las cartografías que aparecen en este trabajo. La base de datos sobre la violencia se sirve de los reportes de los Boletines Diarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para los años que transcurren entre 1998 y 2010, y para los años 2011 y 2012, de las bases de la Policía Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares.

pio, se haya recogido constancia de tal activismo armado durante el tiempo objeto de estudio.

Es por todo que el trabajo presenta tres partes diferenciadas. En la primera, se presentan los estudios sobre la violencia en Colombia, tratando de destacar la relación entre violencia y espacio como una línea de investigación menos prolífica que las que han predominado en la comprensión del conflicto colombiano. Tras ello, se contextualiza el referido proceso de *periferialización*, como un proceso que resulta, muy particularmente, durante la PSD de Álvaro Uribe y sus dos períodos presidenciales de gobierno (2002-06, 2006-10), que tienen como resultado un cambio en la correlación de fuerzas entre el Estado y los grupos guerrilleros, pero también un enquistamiento en las regiones del suroccidente y nororiente del país.

Así, con base en lo anterior, se trata de indagar sobre aspectos que permiten entender dicha evolución espacial de la violencia derivada del conflicto armado con base en cinco factores: 1) el profundo arraigo de los grupos guerrilleros, 2) las diferentes prioridades regionales que el Estado identificó en su lucha armada contra las FARC y el ELN, 3) los preocupantes niveles de rezago económico y social, 4) la concurrencia de ventajas geográficas, estratégicas y de recursos como los cultivos de coca y, finalmente, 5) el factor de afectación que representa el proyecto paramilitar. Cinco variables convergentes en reforzar la hipótesis de por qué el Estado no ha podido resolver militarmente el conflicto armado y por qué las guerrillas, sobre todo las FARC, presentan niveles estables de violencia que obligan a pensar en formas negociadas desde las que poner fin al conflicto, tal y como sucede en la actualidad.

## 1. Marco teórico y conceptual

El conflicto armado colombiano se caracteriza por ser un objeto de estudio el cual, sobre todo, desde hace tres décadas, ha sido prolíficamente abordado. Las principales líneas de su investigación han girado en torno a la génesis y evolución tanto de las guerrillas de las FARC (Pécaut, 2008; Aguilera, 2010; Pizarro, 2011; Medina, 2011) y el ELN (Medina, 1996, 2008; Hernández, 2006, Echandía, 2013) como del paramilitarismo (Medina, 1990; Romero, 2003; Duncan, 2006; Ronderos, 2014).

Otros elementos importantes de análisis han sido las fuentes de financiación y recursos de los diferentes grupos, ya sea a través del despojo de tierras (Reyes, 1993, 2009), del narcotráfico (Palacio y Rojas, 1990; Henderson, 2010) o de otras fuentes de poder económico como el secuestro o la extorsión (Bejarano y Pizarro, 2001, 2003).

Asimismo, se destacan estudios próximos a la comprensión del origen del conflicto (Fals Borda *et al.*, 1962, Oquist, 1978) o al impacto de las condiciones objetivas de la violencia (Sánchez, 1987). Especialmente, y desde finales de los noventa, han predominado estudios sobre la dimensión militar del conflicto, ya sea en clave nacional (Blair, 1993; Leal, 1994) o internacional, especialmente, en relación con la cooperación estadounidense articulada desde el Plan Colombia (Rojas, 2015; Tickner, 2007, Tokatlian, 2011).

Es decir, de acuerdo a lo expuesto, los trabajos que se centran en comprender la dimensión espacial de la violencia, si bien son poco numerosos, sí han resultado muy reveladores. Los primeros esfuerzos por representar espacialmente la violen-

cia en Colombia se encuentran en los aportes del propio Fals Borda *et al.* (1962), quien por medio de mapas busca representar en algún momento cualquier atisbo de violencia durante los años de la guerra partidista que transcurre entre 1948 y 1960. Empero, los mapas resultantes, por la falta de herramientas cartográficas, terminaron siendo mapas monocolors en casi toda la región central del país, lo cual desatendía las particularidades o intensidades dispares de la violencia. Una debilidad ésta, no obstante, repetida en trabajos posteriores, igualmente importantes, como los de Vélez (2001) o Pécaut (2008).

Quizá, el primer trabajo desde la Geografía que atiende, verdaderamente, las relaciones espaciales entre actores violentos, poder y territorio, es el de Reyes (1993), cuyos esfuerzos se desmarcan de los entonces incipientes estudios estructurales de la violencia - dominantes en los noventa. Reyes busca mostrar cómo el origen y la evolución del conflicto tienen mucho que ver con la ruralización del mismo y las luchas agrarias de mediados del siglo pasado en una hipótesis que, recientemente, ha sido contrastada por el trabajo de Zukerman (2012). Asimismo, años después, el propio Reyes (2009) explicará cómo el paramilitarismo tiene una conexión, igualmente directa, con la estructura y el despojo sobre la propiedad de la tierra.

También, en la década de los noventa aparecen trabajos que intentan explicar con instrumentos cartográficos algunas de las dinámicas relacionadas con el conflicto. Así sucede con el activismo narcotraficante del cártel de Medellín (Observatorio Geopolítico de las Drogas, 1996), las territorialidades del cultivo ilícito (Betancourt, 1991) o los corredores del contrabando (Consejo Nacional de Estupefacientes, 1995). Sea como fuere, dos trabajos de obligada referencia en lo que, con posterioridad, inspirará trabajos cartográficos del conflicto son los de Molano (1987) y el PNUD (2003).

Molano, en *Selva adentro*, conceptualiza, por primera vez, la *periferialización* en términos de ruralidad. Esto es, una suerte de Colombia olvidada, que entre la Amazonía y la Orinoquia experimenta el abandono institucional del Estado, en muchas ocasiones suplido por la guerrilla rural, y donde emergen particulares fuentes de financiación de lo que el propio Molano denomina, “la economía invisible” de la marihuana y el cultivo de coca. Por otro lado, el PNUD plasma la consideración narrada por Molano, en todo un ejercicio de cartografías donde, analizando el número de acciones guerrilleras de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares, a lo largo de dos décadas (1985-2002) profundiza en las estrategias de lucha, la permeabilidad de las diferentes regiones, así como su caracterización la cual, parece confluír, mayoritariamente, en una suerte de centro-periferia explicativa del conflicto. Dicotomía que a González le permite concluir que:

La violencia no cubre de manera homogénea ni con igual intensidad el territorio de Colombia. La confrontación armada es altamente diferenciada siguiendo la dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global, su relación con el Estado y el régimen político y, por consiguiente, con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado (citado en PNUD, 2003: 64).

Inspirados en los anteriores, ya desde la década del 2000, los mejores trabajos al respecto son, muy posiblemente, los de Echandía y Salas. El primero, cartografiando las rutas nacionales de narcotráfico (Echandía, 1996) y analizando la relación de recursos económicos, escenarios y grupos armados (Echandía, 2006, 2008, 2013). El segundo, focalizado en los corredores estratégicos que acompañan al conflicto y las traslaciones espaciales experimentadas por el cultivo ilícito en Colombia (Salas, 2010, 2015).

Uno y otro abanderan los más relevantes estudios espaciales sobre el conflicto armado colombiano, incorporando representaciones, especialmente explicativas, por el desarrollo de un análisis geo-estadístico de densidades focales *kernel* (Salas 2007). Un análisis muy revelador, por la visibilidad del grado de afectación y la intensidad espacial de las variables representadas y que, igualmente, está presente en el tipo de mapas y representaciones cartográficas que aparecerán con posterioridad en este mismo trabajo.

Finalmente, no pueden pasarse por alto algunos de los últimos trabajos presentados desde el CINEP y que, igualmente, aceptan la tesis de la *periferialización* del conflicto, si bien, con base en estudios de caso de carácter tanto positivista, en el estudio de la violencia, como bajo un enfoque estrictamente subregional. Al respecto, cabría destacar, entre otros, las aportaciones de García de la Torre y Aramburo (2011) en relación al Urabá antioqueño y chochoano; Vásquez (2011), Torres (2011) y Rodríguez Cuadros (2015), centrados en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, en el suroccidente del país; y , finalmente, los de Aponte y Vargas (2011), González (2012), Piña (2012) y Ocampo (2014), que prestan especial interés al nororiente del país y, particularmente, a lo acontecido en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, fundamentalmente.

Lo particular de esta investigación, relacionada con las aportaciones recién referidas, tiene que ver con lo que se denomina, originalmente, como *periferialización* de la violencia. Esto es, la identificación de un reacomodo de las lógicas armadas del conflicto a partir de la confluencia de factores económicos, militares y políticos, especialmente acontecida entre 2002 y 2014. Fruto de esta *periferialización*, los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN han ido perdiendo influencia armada y capacidad de control territorial en los enclaves centrales del país, a la par que han mantenido niveles inalterados, cuando no crecientes, de poder en otros escenarios geográficos. Escenarios como el nororiente y el suroccidente del país, mayormente fronterizos y alejados del centro, donde los grupos guerrilleros obtienen, presumiblemente, ventajas competitivas para continuar su activismo armado. Escenarios que serán el objeto de estudio de este trabajo. No obstante, y como se señalaba al inicio de este trabajo, más específicamente, se podría hablar de una segunda *periferialización*, pues desde su origen, a mediados de los sesenta, y prácticamente, hasta la década de los noventa, el conflicto armado colombiano ya había sido estrictamente periférico. Es decir, se había consolidado, mayormente, en enclaves rurales, muy distanciados del centro, y con escasa presencia del Estado y solo, a partir de finales de los noventa, la condición periférica aspira a ser central y ocupar los principales centros urbanos del país. Sin embargo, mayormente, y como se señalaba, es el impacto de la PSD y, en segundo término, otras variables que, a continuación, serán abordadas, las que permiten entender un nuevo reacomodo de las fuerzas guerrilleras en lo denominado en este trabajo como periferia. Una periferia que comprende el suroccidente y el nororiente, si bien, con tendencias de cierto cambio

pues mientras que algunos departamentos, especialmente, en el suroccidente, como Cauca, Caquetá y Putumayo, habían sido siempre de gran presencia guerrilla, principalmente de las FARC, otros como Nariño, cambian su posición de retaguardia estratégica para pasar a ser enclaves de prioridad territorial.

## **2. De la estrategia envolvente sobre el centro a la periferalización de la violencia**

Los niveles de violencia que presentaba el conflicto colombiano hacia el año 2000 eran tales que, en esos años, se concentra buena parte de la atención académica habida cuenta de su proximidad a la noción de “Estado fallido” (*Failure State*) (Rotberg, 2004; Valencia, 2002).

Al margen del “fetichismo de etiquetas” lo cierto es que el control territorial, la garantía integral de la seguridad, el monopolio efectivo de la violencia o la ubicuidad institucional del Estado de Derecho quedaban, cuando menos, en cuestionamiento.

Si se atiende a las cifras facilitadas desde el ODHDIH, hacia 2002 las FARC habían acumulado por encima de 1.000 acciones guerrilleras, a las que se sumaban otras 154 del ELN. Los combates por iniciativa de la Fuerza Pública ascendían a 1.500 operativos anuales. Por primera vez se superaban los 3.500 secuestros, el desplazamiento forzado se multiplicaba por ocho y llegaba a los 180.000 casos anuales. Asimismo, en 2002 se cometieron más de 230 asesinatos políticos y 640 masacres, la mayoría, responsabilidad del paramilitarismo. Se identificaron 2.770 violaciones a los Derechos Humanos (CINEP, 2010: 3) y 1.000 atentados contra la infraestructura (MINDEFENSA, 2005: 16). Las FARC llegaban a su hito histórico de 16.900 guerrilleros y 70 frentes, el ELN superaba los 40 frentes y se mantenía en los 3.700 guerrilleros y las AUC superaban los 12.000 efectivos. Es decir, buena parte del país se encontraba involucrada en el conflicto, bien como territorio controlado por la guerrilla, bien como territorio controlado por el paramilitarismo o, en última instancia, protegido, en la medida de lo posible, por la Fuerza Pública.

Esta tesitura tiene lugar dentro de una doble coyuntura. En primer lugar, por la ruptura del proceso del Caguán y la ofensiva armada que lanzan las FARC sobre Bogotá, con el propósito de cercar la capital del país y conseguir su clásica aspiración de tomar el poder político por las armas. En segundo lugar, por el auge del paramilitarismo, que presenta sus mayores niveles de violencia, desplazamiento forzado y masacres, especialmente, en el norte del país y la región central del Magdalena Medio. Suma de lo anterior el gobierno saliente de Andrés Pastrana quedaba desdibujado por un importante déficit de legitimidad, percibido como un gobierno débil, sometido a merced del Secretariado y el Estado Mayor conjunto de las FARC e incapaz de evitar la proliferación paramilitar.

En esta tesitura de parcial colapso del Estado emerge la figura de Álvaro Uribe. Un presidente que consigue imponerse en 2002 con una campaña que concibe que la superación del conflicto armado pasa por un fortalecimiento de la Fuerza Pública. Esto es, entendiendo que la normalidad del Estado pasa por garantizar seguridad a la ciudadanía en unos términos de concepción de la paz como ausencia de guerra y no como ausencia de las condiciones estructurales y culturales que alimentan esa guerra. A esto, además, se une un cambio en el código geopolítico estadou-

nidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la “guerra contra el terrorismo”. Un binomio que permite la adopción de un discurso que niega la existencia de guerrillas en Colombia, al entender que el problema se reduce a una cuestión de terrorismo y crimen organizado frente a lo cual la prioridad es la seguridad. Es al respecto que la PSD, en el primer mandato presidencial de Uribe, destina a un total de 1.835 millones de dólares (Presidencia de la República, 2007: 33). Montante al que suman otros 5.770 millones en el segundo mandato presidencial (Presidencia de la República, 2010: 30) y 7.000 millones de dólares provenientes del Plan Colombia.

Solo entre 2002 y 2010 la Fuerza Pública colombiana pasó de 313.000 efectivos, entre policías y militares, a 430.000, a lo que se suma un avance cualitativo en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (MINDEFENSA, 2010: 68). De hecho, Colombia pasa a convertirse en el país de América Latina con más Fuerza Pública por habitante, con 881 efectivos cada 100.000 habitantes, sólo superado por Bolivia (MINDEFENSA, 2011: 17).

Frente a la ausencia de policía en 168 municipios del país (Rangel y Medellín, 2010: 7) y la falta de control sobre buena parte de las carreteras del país —como muestran las 423 “pescas milagrosas”<sup>4</sup> de 2002— se incrementa la presencia policial y militar en buena parte del país. Se crean 429 nuevas operativas en las Fuerzas Militares, 180 estaciones de Policía y 152 subestaciones de Policía que permiten acumular, entre 2002 y 2010, un total de 16.921 combates contra las guerrillas (ODHDIH), destruir 20.062 laboratorios cocaleros o incautar 1.269 toneladas de cocaína.

Así, tras ocho años de política de seguridad, los homicidios pasaron de casi 30.000 a menos de 16.000, y el número de secuestros se redujo en un 90%. Las acciones de las FARC en 2010 cayeron a 724 en 166 municipios y las del ELN a 65 en 27 municipios. Es decir, el alcance de la violencia y el control municipal por parte de las guerrillas se reducía en un 50%, hasta el punto de hacerlas desaparecer de departamentos como Cundinamarca, Santander, Boyacá, el eje cafetero, o la costa Atlántico (ODHDIH).

Es todo lo anterior lo que permite abordar un concepto como el de la *periferialización* de la violencia en Colombia. Una *periferialización* por la que las guerrillas abandonan buena parte de sus enclaves centrales en el país, en contraste con lo que sucede en el nororiente y el suroccidente. Enclaves periféricos, lejos del centro, y donde las condiciones selváticas, montañosas y fronterizas, la ausencia del Estado o paramilitarismo, o la concurrencia de fuentes de poder económico, como el cultivo ilícito y el narcotráfico, sirven de escenario óptimo para persistir en una guerra de guerrillas cuya intensidad mantiene el mismo vigor, si no más, que hace dos décadas.

A lo anterior, hay que sumar la importancia que supuso el Plan Colombia, diseñado conjuntamente con Estados Unidos, en todo este proceso de debilitamiento de las guerrillas. Este Plan Colombia tenía como prioridad afectar a la principal fuente de financiación de las guerrillas, la cual, hacia el año 2000 representaba más de la

---

<sup>4</sup> Por “pesca milagrosa” se entiende a los retenes que realizaban las guerrillas sobre carreteras sin control policial, con el fin de extorsionar y secuestrar de manera selectiva a quienes por allí transitaban.



mitad de los 1.500 millones de ingresos que, anualmente, percibían las FARC (Henderson, 2010). Se pensaba pues, que actuando contra el cultivo ilícito, sobre la base de aspersiones con glifosato, se debilitaba económicamente a las FARC. Es por ello que algunos de los enclaves de disputas más importantes están en la Amazonía y la Orinoquia, lo cual, igualmente, permite entender la traslación del conflicto, en buena medida, hacia el Pacífico. Es decir, además del macizo colombiano, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo (Ramírez, 2009; Gallardo, 2005), el propósito va a ser reducir a la mitad el total del cultivo ilícito. Ello, porque esta estrategia reactiva buscaba, en último término, motivar a que los campesinos abandonasen el cultivo ilícito para pasar a desarrollar otros proyectos alternativos que serían invocados, en paralelo al Plan Colombia, por el propio Estado colombiano.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que en el transcurso de esta década, los casi 9.000 millones de dólares provenientes de Estados Unidos se orientaron hacia seis objetivos centrales, los cuales terminaron por integrarse en la misma PSD de la presidencia de Álvaro Uribe: 1) fortalecer la lucha contra el narcotráfico, integrando la acción de las Fuerzas Armadas; 2) fortalecer el sistema judicial y lucha contra la corrupción; 3) neutralizar el sistema de finanzas del comercio de drogas para revertirlo en favor del Estado; 4) neutralizar y combatir los agentes de la violencia que actúan en connivencia con el tráfico de drogas; 5) integrar las iniciativas que provienen de las diferentes escalas geográficas local-nacional-internacional y, finalmente, 6) fortalecer y expandir planes para desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el tráfico de drogas (Otero, 2010: 197).

Seis objetivos que se traducen en las siguientes cifras: solamente entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros, se incautaron 1.233 toneladas de marihuana, 5,3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Si en 2002, la superficie de coca era de 130.364 ha, en 2010, la superficie se había reducido a 58.073 ha.

También, con recursos provenientes del Plan Colombia se inició el proceso de modernización y repotenciación de las aeronaves de ala fija (aviones y avionetas) y ala rotatoria (helicópteros) de la Fuerza Aérea, que fue complementado con equipos entregados en préstamo de uso para cumplir con los objetivos establecidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Traducido en números, si en 1999 se emplearon 34 helicópteros y 1 avión en la lucha contra el narcotráfico, en 2005 se estaban empleando 125 helicópteros y 14 aviones. Igualmente, en horas de vuelo, si Policía y Ejército destinaban en 1999 un total de 15.955 horas para combatir las finanzas provenientes del cultivo ilícito, en 2005 esa cifra ascendía a 35.000 (Departamento de Planeación Nacional, 2006: 26).

Finalmente, cabría destacar el notable apoyo en cuanto a la operatividad militar que supuso el Plan Colombia, y que se tradujo en asistencia técnica a las bases de Apiay, en el departamento de Meta, donde se encontraban los batallones de la Brigada VII; la base de Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se estaban los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandía, en el departamento de Caquetá. Elementos que, si bien en lo que respecta al eje Meta-Caquetá-Putumayo, no se tradujeron en una desaparición o mitigación del activismo guerrillero, sobre todo, de las FARC, sí que contribuyeron notablemente a evitar la estrategia de centralidad identificada al inicio.

### 3. La *periferialización* de la violencia en Colombia

La *periferialización* experimentada en los últimos años por el conflicto interno en Colombia, como se decía, supone un enquistamiento de la violencia en departamentos que, geográficamente, se encuentran muy alejados de Bogotá y los grandes centros económicos y políticos del país. Pero también se trata de departamentos en los que se concentra hasta dos terceras partes del total de cultivos de coca. Asimismo, son departamentos en los que los indicadores socio-económicos presentan un mayor rezago. Es decir, tras la *periferialización* concurre una yuxtaposición de debilidad institucional, violencia estructural y violencia directa que permite entender, no solo por qué la PSD no resultó exitosa en todo el país, sino qué contextos son los que, bajo el escenario inminente de posconflicto armado, tienen mayores posibilidades de mantener niveles inalterados, cuando no crecientes, de violencia. Es decir, en todo caso, la *periferialización* no es un proceso casual, sino que se conecta con las cuatro variables en las que se profundizará a continuación.

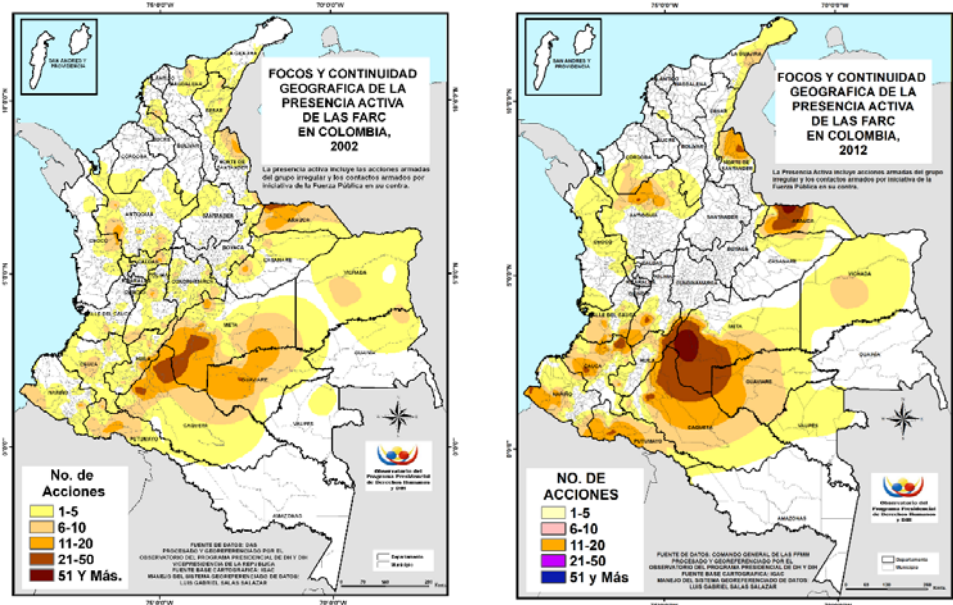
#### 3.1. Escenarios tradicionales de retaguardia guerrillera

El suroccidente del país, conformado por los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, se ha erigido como un corredor de alto valor agregado para las FARC, muy particularmente por la presencia del Bloque Sur y, en menor medida, del Bloque Occidental. Esto, porque Caquetá siempre fue un departamento de gran presencia guerrillera, especialmente en el oriente, fruto de la presencia de unos frentes 14 y 15 que, durante toda la década pasada, controlaron prácticamente tres cuartas partes de los municipios departamentales. Ello, acumulando, entre 2002 y 2014, más de 700 acciones armadas y con niveles de activismo inalterados durante los últimos años. En Putumayo, la presencia de los frentes 32, 48 y 62 ha afectado, en los últimos doce años a 9 de los 12 municipios del departamento, registrándose entre 2002 y 2014 casi 700 acciones guerrilleras e, igualmente, sin atisbo alguno de disminución. En lo que respectaría a Nariño, la presencia de las FARC se articula en torno al frente 29, hasta 2008, dirigido por “Raúl Reyes”, número 2 de las FARC, protagonista de más de 900 acciones guerrilleras entre 2002 y 2014 y con un arraigo municipal que afectaría, en la actualidad, a 16 municipios de los 64 municipios del país. Por último, el departamento de mayor beligerancia de las FARC sería Cauca, donde entre 2002 y 2014 se han registrado en torno a 1.500 acciones guerrilleras, especialmente de los frentes 8 y 60, en el sur del departamento, y del Bloque Central en el nororiente. Un departamento, éste, en el que la presencia de las FARC afectaría a 30 municipios de los 42 que conforman el departamento.

Este suroccidente, sin embargo, se vería poco afectado por la presencia de un ELN ausente en Caquetá y Putumayo, y poco activo en los departamentos de Nariño y Cauca. En el caso de Nariño, debilitado por la confrontación con las FARC hasta casi 2010. Es desde entonces que se reorganiza en los municipios de Puerres, Ricaurte, Tumaco, Taminango y Túquerres, protagonizando en los últimos cuatro años hasta medio centenar de acciones por parte del frente Comuneros del Sur. En el caso de Cauca, la presencia de un frente como el Manuel Vásquez Castaño, activo en torno a Popayán, especialmente desde 2009, ha protagonizado una treintena de acciones, aunque nada comparables a los términos de activismo de finales de los noventa, cuando su presencia era mucho mayor.

En el nororiente existe una mayor paridad en la presencia guerrillera de FARC y ELN. En el caso de Norte de Santander, el frente 33 de las FARC ha sido protagonista, entre 2002 y 2014, de cerca de 500 acciones guerrilleras, casi todas ellas, en la región del Catatumbo, en torno a los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y, sobre todo, Tibú. De hecho, la presencia de las FARC no solo no se ha mitigado, sino que se ha incrementado muy exponencialmente en los últimos años. Igualmente, el ELN tras varios años de repliegue de sus frentes Carlos Armando Cauca Guerrero y Juan Fernando Porras, por el impacto del paramilitarismo y la creciente preponderancia de las FARC, ha ido acumulando mayor activismo, al acumular en estos últimos cinco años más de medio centenar de acciones, igualmente, focalizadas, casi en su totalidad, en el Catatumbo.

Mapa 1. Continuidad de la presencia activa de las FARC (2002-2012)



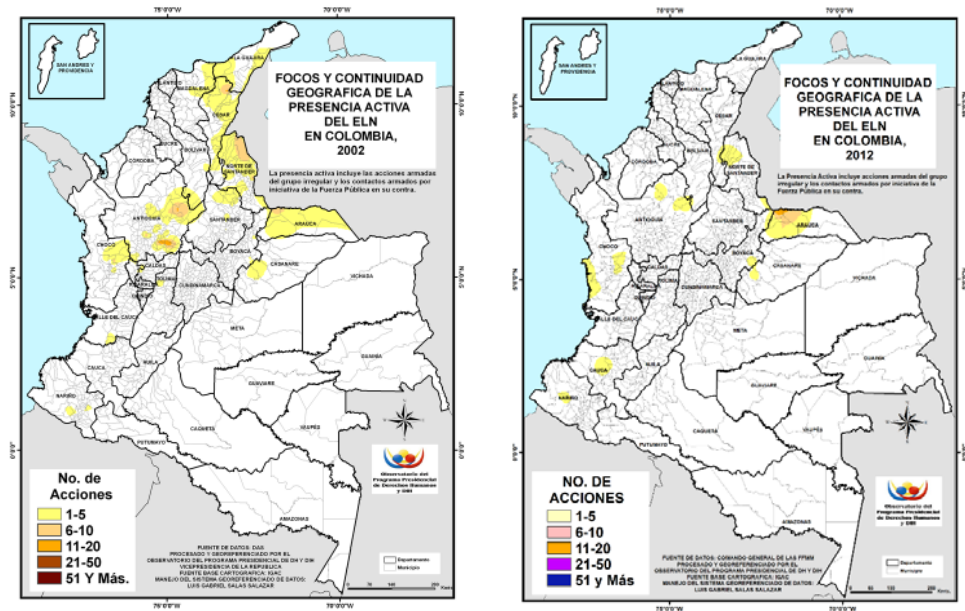
Fuente: ODHDIH.

Por último, quedaría Arauca, un departamento en el que las FARC y el ELN confrontaron durante casi toda la década pasada, por la voluntad de las primeras de favorecer cultivos ilícitos frente a las reticencias del frente Domingo Laín del ELN. Lo cierto es que las FARC entre 2002 y 2014 han protagonizado, a través del frente 10, cerca de 600 acciones guerrilleras, lejos de toda desaparición, sobre todo, desde 2009. Lo mismo sucedería con un ELN, recompuesto, desde 2011, y que ha recuperado la presencia en casi todos los municipios del departamento, protagonizando hasta 2014 cerca de 100 acciones guerrilleras y unos niveles de intensidad armada similares a los de hace una década.

En conclusión, se podría entender que los departamentos ubicados en los corredores tanto suroccidental como nororiental han sido enclaves de muy notable presencia guerrillera desde hace más de una década sin que, en ningún caso, hayan de-

caído los niveles de activismo guerrillero o presencia municipal. De este modo, la *periferialización* de la violencia cabe entenderla, no tanto por una nueva apropiación de espacios fronterizos desde los que dar continuidad al conflicto armado por parte de las guerrillas sino, más bien, como resultado de un debilitamiento de las FARC y el ELN en otros escenarios, tal y como se verá a continuación. Es más, si en los departamentos del suroccidente, las FARC, hacia 2002, tenían presencia en 63 municipios en los que habían protagonizado un total de 229 acciones armadas, más diez años después, la misma presencia se mantiene estable en 71 municipios, con un total de 368 acciones guerrilleras. En el caso del ELN la proporción es menor, pues en 2002 tenía presencia en solo 6 municipios de Nariño, donde protagonizó 6 acciones guerrilleras. Más de una década después, el ELN lleva a cabo 7 acciones guerrilleras en 7 municipios de Cauca y 9 acciones guerrilleras en 8 municipios de Nariño. Por su parte, en el nororiente, las FARC hacia el año 2002 tenían presencia en 13 municipios, en los que desplegó 105 acciones armadas. Más de una década después, la presencia municipal ascendía a 18 municipios y 131 acciones armadas. Algo similar a un ELN con presencia en 14 municipios y protagonista de 46 acciones armadas en 2002 y que una década después mantiene en 11 municipios donde despliega 40 acciones armadas (ODHDIH, 2014).

Mapa 2. Continuidad de la presencia activa del ELN (2002-2012)



Fuente: ODHDIH.

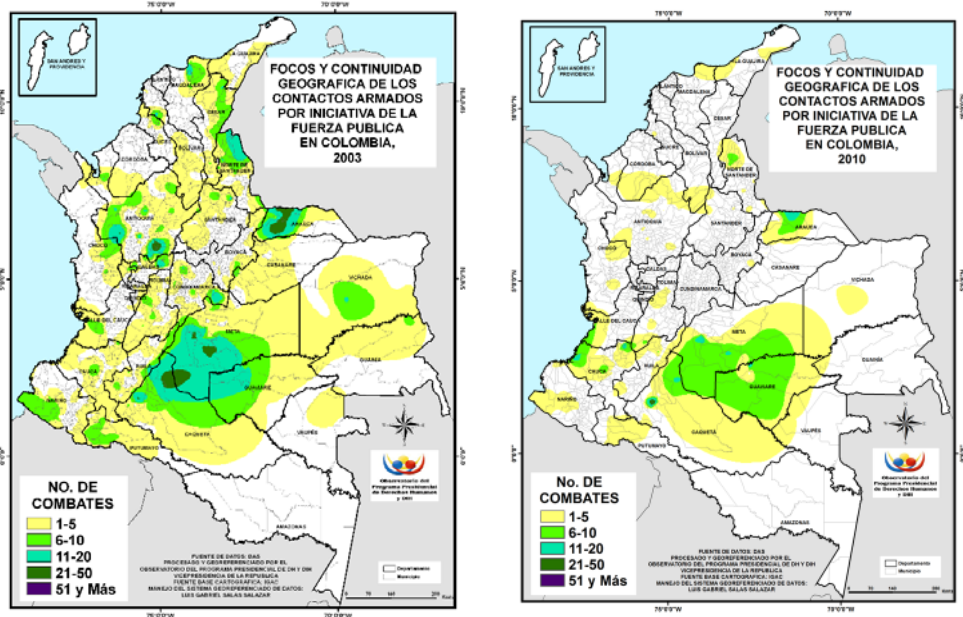
### 3.2. Escenarios alejados de la Política de Seguridad Democrática

Relacionado con lo anterior es que se puede entender que los enclaves periféricos, durante la evocada PSD, no fueron enclaves de disputa en favor de la obtención y

posterior consolidación de la seguridad, tal y como esperaba la presidencia de Álvaro Uribe.

Una de las primeras medidas promovidas por el Ministerio de Defensa de Marta Lucía Ramírez, hacia 2002, fue la de interpretar que la percepción de seguridad pasaba, muy necesariamente, por recuperar el control de unas carreteras que, tradicionalmente, eran objeto de extorsión y secuestro por parte de las guerrillas. Ello, especialmente notorio en torno a Medellín o en los departamentos de la costa Atlántico, va a dar lugar a un proyecto piloto en el departamento de Cesar, sobre los ejes Valledupar-Santa Marta, Valledupar-Maicao-Riohacha y Valledupar-Pailitas. Dado el impacto sobre la percepción subjetiva de seguridad, por tratarse de escenarios altamente transitados, la iniciativa es replicada en las carreteras que unen Cartagena y Sincelejo y Medellín-Mutató y, después, sobre la vía que una la capital antioqueña con Bogotá. Esta medida terminará siendo un éxito, en tanto que proyectaba una imagen de control territorial y presencia policial del Estado que, sin embargo, no era extensible, ni mucho menos, a todo el país.

Mapa 3. Evolución de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública (2003-2010)



Fuente: ODHDIH

A la vez de lo anterior, la PSD y la disputa, conquista y consolidación territorial, respondían a una lógica centrífuga, que parte del centro para extenderse, paulatinamente, hacia la periferia. Buena prueba de ello es la Operación Libertad I, posiblemente, el punto de partida de la PSD. Una operación en la que participaron más de 15.000 efectivos en un campo de acción de más de 70.000 km<sup>2</sup> que, abarcando el oriente de Tolima, todo el departamento de Cundinamarca, el norte de Meta y el suroriente de Boyacá, permite romper el cerco que las FARC buscaban desarrollar sobre el centro del país. De hecho, esta operación, supone una sucesión de victorias y conquistas territoriales que marcan el inicio del cambio en la correla-

ción de fuerzas favorable para el Estado, además de traer consigo la muerte de importantes líderes, especialmente de las FARC, como “Manguera”, “El Viejo” o “Marco Aurelio Buendía” (Pizarro, 2011).

Derivado de lo anterior, en apenas dos años, entre 2002 y 2004, las FARC desaparecen de Cundinamarca, Boyacá y Risaralda, y se encuentran en claro repliegue en los departamentos centrales de Quindío y Caldas. Por su parte, el ELN para 2004 ha desaparecido por completo de la región central del país. Indudablemente, el volumen de operativos dispuesto por la Fuerza Pública contra las guerrillas (720), supera por mucho las acciones guerrilleras de FARC (415) y ELN (19), siendo imprescindible para entender cómo se resuelve esta correlación de fuerzas en favor del Estado.

Algo similar sucede en los departamentos de Santander y Casanare, en la región oriental, pero, igualmente, próximos al centro del país. En ambos casos, hacia 2004, FARC y ELN, prácticamente, han desaparecido. En el caso de Santander, tras 169 operativos contra unas guerrillas que, entre 2002 y 2004 apenas alcanzan 20 acciones en el caso del ELN y 13 de las FARC. Lo mismo sucedería en Casanare, cuando en estos tres años se contabilizan 113 combates de la Fuerza Pública por 69 acciones de las FARC y 23 del ELN.

Finalmente, para 2005-2006, los operativos de la PSD han ido, paulatinamente, consolidando la presencia del Estado a través de la Fuerza Pública en cada vez, más parte del territorio colombiano. A ello contribuye, por ejemplo, la desmovilización paramilitar producida al amparo de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, y que permite poner fin a la presencia de hasta 33.000 combatientes adscritos al paramilitarismo de las AUC. Así, para 2005 prácticamente todos los departamentos de la costa Atlántico, con las excepciones de Sucre y Bolívar, han experimentado la desaparición del activismo guerrillero. En Córdoba, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Cesar, si en 2002 las FARC protagonizaban 75 acciones guerrilleras, en 2007 la cifra se reducía hasta las 7 acciones, 6 de ellas en Magdalena. Lo mismo para un ELN que, en estos cinco departamentos, entre 2002 y 2006, pasa de 20 acciones guerrilleras a la total desaparición. Tras esto, posiblemente, se encuentre una razón en los 1.127 combates que la Fuerza Pública dirige contra las guerrillas. Combates a los que se suman otros 730 operativos en Sucre y Bolívar que harán que las guerrillas queden relegadas a la práctica desaparición, hacia finales de 2008.

En definitiva, primero Cundinamarca, Boyacá y parte del eje cafetero; después Santander y Casanare; posteriormente, Caldas y Risaralda y, finalmente, la costa Atlántico, permiten observar cómo, entre 2002 y 2008, la PSD obtiene éxitos militares que debilitan las estructuras guerrillas de las FARC y el ELN. Empero, a la vez, en los departamentos del nororiente y del suroccidente acontece una situación bien distinta: en ningún momento se aprecia la obtención de operativos decisivos o cambios en la correlación de fuerzas desde los que ser optimistas a efectos de una victoria militar sobre las guerrillas. Además del arraigo guerrillero, este valor de retaguardia, que aleja estos escenarios frente a las prioridades territoriales en disputa, es un factor nada desdeñable. Así lo han puesto de manifiesto algunos estudios de caso sobre África sub-sahariana u Oriente Medio como los de Salehyan (2007), Cunningham *et al* (2009), O’Loughlin *et al.* (2012) Cederman *et al.* (2013) o Tollefsen y Buhaug (2015).

### 3.3. Escenarios de mayor violencia estructural

La *periferialización* del activismo guerrillero en el nororiente y suroccidente colombiano encuentra otras razones explicativas más allá de la presencia guerrillera o la lógica centrífuga de la Seguridad Democrática. La condición periférica de estos departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander se debe más allá que a una cuestión geográfica y fronteriza, alejada de los centros decisorios del país. A tal efecto, es imprescindible considerar la dimensión de la violencia estructural, definida tradicionalmente por Galtung (2003b) como la violencia que hace parte de los sistemas sociales, políticos, y económicos a través de la injusticia y la desigualdad, perfectamente perceptible a través de indicadores de pobreza, exclusión social o informalidad. Esta violencia estructural, para autores como como Mitchell (1981), Burton (1990) o Miall *et al.* (2015), permiten entender conflictos armados como el colombiano y como, *ex profeso*, han reconocido las aportaciones de Pizarro (2004), Echandía (2006) o Restrepo (2006).

En términos de esta violencia estructural, los departamentos referidos se encuentran rezagados en términos de calidad de vida, desarrollo humano, necesidades básicas insatisfechas, ingresos económicos o desempleo, lo cual permite albergar la hipótesis de un escenario, por ende, con una institucionalidad más débil, por un lado, y por otro, con menores capacidades para combatir la violencia directa derivada de la presencia de los grupos armados. Es más, todos los departamentos mencionados, junto con Antioquia, son los que, además, presentarían los mayores números de acciones guerrilleras del país, superando, en todo caso, las 64 acciones anuales.

De este modo, y tal y como se puede observar en la siguiente Tabla 1, es que la condición periférica resulta extensible a las condiciones sociales y económicas que presentan estos departamentos del nororiente y suroccidente del país.

Tabla 1. Relación entre departamentos violentos y principales indicadores socio-económicos (2013)

	<b>Grupo I Departamentos periféricos*</b>	<b>Grupo II Resto de departamentos</b>	<b>Media Nacional</b>
<b>Acciones Armadas</b>	91,50	13,84	28,97
<b>PIB per cápita por unidad de gasto</b>	312.810 pesos	448.392 pesos	425.795 pesos
<b>Incidencia de la pobreza</b>	46,95 %	36,63 %	38,40 %
<b>Incidencia de la pobreza extrema</b>	18,00 %	11,82 %	12,50 %
<b>Tasa de desempleo</b>	10,87 %	9,49 %	9,72 %
<b>Índice Desarrollo Humano</b>	0,774	0,825	0,814
<b>Necesidades Básicas Insatisfechas</b>	58,31 %	47,64%	53,51 %

\* Por departamentos periféricos se entienden todos aquellos que se encuentran en los enclaves descritos del suroccidente y del nororiente del país. Todos, comparten el hecho de ser los más violentos de Colombia, superando las 60 acciones guerrilleras anuales.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la página web del DANE y del DPS.

Por ejemplo, a grandes rasgos, se puede apreciar un 50% menos ingresos que en el resto de departamentos, de manera tal que, si la media en estos seis departamentos en cuanto al PIB per cápita por unidad familiar está en 312.810 pesos, en el resto de departamentos, el promedio, asciende a casi 450.000. La incidencia de la pobreza y la pobreza extrema es casi un 33% y un 80% superior, respectivamente, en

los departamentos periféricos. El desempleo es 1,5 puntos superior en estas regiones más violentas de la periferia respecto del resto de departamentos y el conjunto nacional. Igualmente, se puede apreciar la condición socio-económica periférica, en tanto y en cuanto, el porcentaje de afectados por necesidades básicas insatisfechas es un 11% mayor en los departamentos más violentos. También el desarrollo humano difiere sustancialmente entre los departamentos más afectados por la violencia (0,774), el resto de departamentos (0,825) y el promedio nacional. Finalmente, según Ramírez *et al.* (2014: 10 y ss.), estas debilidades también se encuentran en otros niveles como competitividad, infraestructura, capital humano o fortaleza económica, a tenor de que todos los departamentos referidos entre los niveles más rezagados del país.

### 3.4. Escenarios cocaleros y corredores estratégicos

Aparte de todo lo anterior, la *periferalización* de la violencia encontraría otro factor explicativo en tanto que los departamentos mencionados son escenarios cocaleros y corredores estratégicos de gran importancia. El nororiente presenta dos elementos fundamentales para los grupos guerrilleros. Por un lado, la angosta cordillera nororiental andina, objeto de refugio, sobre todo para las FARC. Por otro, una condición fronteriza con Venezuela a lo largo de 816 kilómetros, en los que la porosidad y las posibilidades de refugio de la frontera fueron conocidas tras acceder al ordenador del número 2 de las FARC, “Raúl Reyes”, una vez que fue abatido tras la Operación Fénix de junio de 2008. Asimismo, a través de Venezuela, y particularmente, en torno al eje Norte de Santander-Arauca, se estima que transcurren en forma de contrabando cerca de 3.000 millones de pesos, y a lo que habría que añadir la importancia de Venezuela como corredor de salida para la coca procesada, rumbo a Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes y Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, 2015).

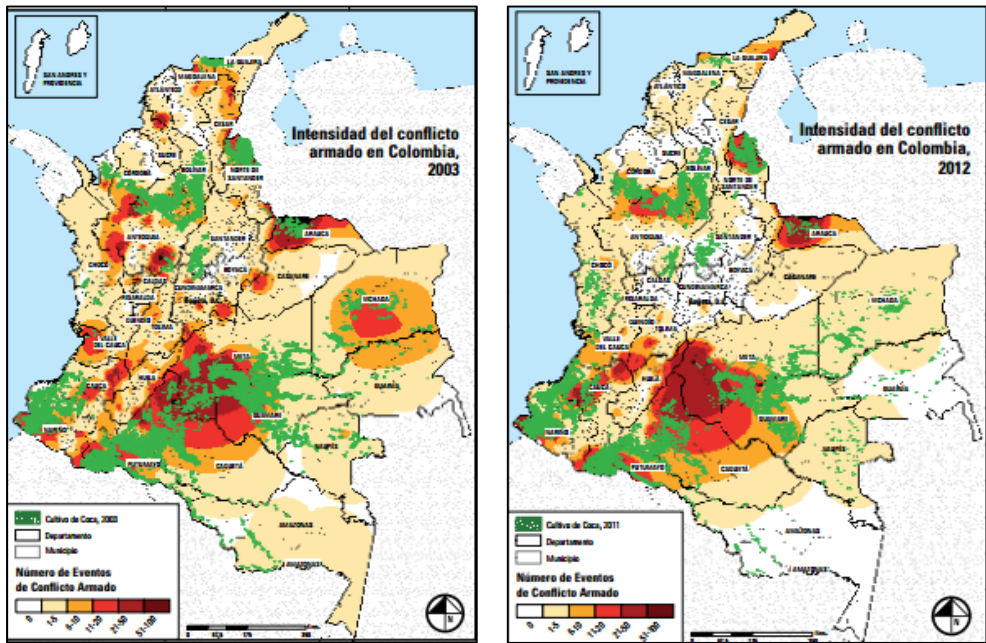
De otro lado, en el suroccidente, se puede identificar una geografía favorable a la presencia guerrillera y contraria a la puesta en marcha de operativos con los que, exitosamente, combatir a las guerrillas. En Caquetá, en el oriente del departamento, se condensa buena parte del activismo guerrillero, gracias al valor estratégico de la serranía selvática del Chiribete, en el occidente y, sobre todo, la serranía de Araraucara, por donde transcurren caudalosos ríos como el Caquetá. En Putumayo, la cordillera oriental y la llanura amazónica; y en Nariño y Cauca, la cordillera centro-oriental y occidental, y todo el ingente manglar selvático, son invaluable escenarios estratégicos desde los que mantener la guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas en las que los frentes 32, 48 y 64 en Putumayo, y el frente 29 de las FARC, incluso disponen de campamentos guerrilleros en el norte de Perú y Ecuador, respectivamente. Además, esta ruta del Pacífico, se estima que condensa cerca de un 70% de la droga colombiana que sale al exterior, a través de puertos como Buenaventura o Tumaco, en Cauca y Nariño, y con dirección a Ecuador, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Junto al valor agregado que suponen las cordilleras, selvas y manglares para la presencia de la guerrilla, y unido a la condición estratégica tanto para la lucha armada como para incorporar las mercancías de la droga en los circuitos de distribución de la droga, un tercer aspecto importante es que estos enclaves periféricos son



mayormente productores de coca y donde se aprecia una mayor proximidad de estos grupos guerrilleros con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Unos cultivos que representan el rubro más significativo, esto es, de más de la mitad de los ingresos para las guerrillas, especialmente para las FARC (Bejarano y Pizarro, 2001; Henderson, 2010).

Mapa 4. Evolución de la intensidad del conflicto y relación con el cultivo de coca (2003-2012)



Fuente: Salas (2015: 166).

Por ejemplo, según los datos de UNODC (2015) sobre el total del área cultivada neta con coca, ésta pasó de 48.000 ha a 69.000 ha en el último año, y con la excepción de Arauca, donde prácticamente no hay cultivos de coca, los otros cinco departamentos identificados como periféricos por todo lo expuesto, son los que presentan un mayor nivel de hectáreas cultivadas: Nariño 17.285 ha, Putumayo 13.609 ha, Norte de Santander 6.944 ha, Caquetá 6.542 ha y Cauca 6.389 ha. Esto supone un total de 50.769 ha o, lo que es igual, las tres cuartas partes del total de los cultivos de coca del país. Cultivos que, en un solo año, en estos departamentos se han incrementado en más de un 45%.

Igualmente, conviene recordar que, según las cifras para el año 2013, de las 71 acciones guerrilleras protagonizadas por el ELN en todo el país, el 70,4% (50) se condensaron en municipios cocaleros en estos departamentos. Igualmente, de las 824 acciones de las FARC, 499, es decir, el 60,55%, se condensaron, igualmente, en estos seis departamentos. Asimismo, en Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, se identifica casi una correspondencia completa, del 100% entre municipios con presencia guerrillas de las FARC y la concurrencia de cultivos de coca (Ríos, 2016a).

Unido a lo anterior, hay que sumar la porosidad fronteriza, especialmente, con Ecuador y Venezuela, y que supone una ventaja comparativa, tanto a efectos de ubicación de campamentos como de conexión con los mercados del narcotráfico. Por ejemplo, es consabido que durante los últimos años, el frente 29 de las FARC tuvo campamentos en el norte de Ecuador y, de hecho, conviene recordar de qué modo, la puesta en marcha de la controvertida Operación Fénix supuso la muerte del líder guerrillero “Raúl Reyes”, precisamente en la región ecuatoriana de Angostura. Igualmente, conviene recordar cómo en el ordenador del propio comandante abatido de las FARC, obtenido tras la operación, se encontró valiosa información que ubicaba campamentos de los Frente 33 y 10 de las FARC en Venezuela.

### 3.5. La afectación paramilitar

Un factor clave, igualmente, para entender la *periferialización*, guarda directa relación con el nivel de presencia y arraigo del proyecto paramilitar. Si bien el paramilitarismo surge en Colombia desde finales de los setenta, en la conocida como región del Magdalena Medio, pasa a tener una posición de poder local mucho más influyente, una vez que, a inicios de los noventa, desaparecen los cárteles de la droga y, especialmente, el cártel de Medellín. Es a partir de ese momento, que el proyecto paramilitar empieza a concitar un cúmulo de fuentes de poder social que van a permitir un particular arraigo en el norte del país.

Es decir, desde una ideología marcadamente anticomunista y ultraconservadora, con base en apoyos provenientes de ganaderos y empresarios del norte del país e, igualmente, desde un importante rubro de finanzas erigido desde el narcotráfico y la acumulación de tierras, el paramilitarismo, desde 1994, organizado en torno a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), empieza a ganar presencia en el departamento de Antioquia y los siete departamentos que conforman la conocida como región Atlántica.

Por si fuera poco, todo quedaba revestido de un aura de legalidad, fruto de que la conformación de grupos de autodefensa civil antiguerrillera era legal desde 1965, y hasta que, en 1997, el entonces presidente, Ernesto Samper, consciente de que el germen paramilitar, por todo lo anterior, está acumulando ingentes cantidades de poder, es que deroga dicha posibilidad y atribuye a la Fuerza Pública, en exclusiva, la función de seguridad y control territorial. Es esto lo que, por ende, permite el tránsito de las ACCU a unas AUC que para finales de los noventa, ya se ha consolidado en la región central del país, y especialmente en torno a Antioquia, Santander y los departamentos de la costa Atlántica (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico y, sobre todo, Córdoba y Cesar).

Es más, tales van a ser las posibilidades de expansión del proyecto paramilitar, que a inicios de la década pasada, las AUC vislumbran la posibilidad de disputar el poder local, no solo donde el paramilitarismo encontraba ventajas comparativas sobre la guerrilla, como en la mayoría de los departamentos del centro y norte del país, sino, igualmente, en enclaves de notable arraigo guerrillero como los mencionados departamentos, tanto del nororiente (Arauca y Norte de Santander) como del suroccidente (Caquetá, Cauca, Nariño o Putumayo).

Así, es que se puede entender de qué modo el paramilitarismo colombiano, entre finales de los noventa y principios de la década pasada se expande, organizándose en torno a 19 grandes bloques que, prácticamente, copan buena parte de la

geografía del país<sup>5</sup>. Sin embargo, y de acuerdo con la información que se encuentra en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las estructuras más poderosas, según el número de efectivos, el control territorial y el número de masacres que evidencian la máxima expresión del hostigamiento contra la población civil, en muchas ocasiones, susceptible de colaborar con las guerrillas, van a ser los bloques denominados como Bloque Norte (operativo en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena), el Bloque Héroes de Montes de María (operativo en Sucre y Cesar), el Bloque Córdoba (ubicada en Córdoba, el corazón territorial del paramilitarismo) y los Bloques Élmer Cárdenas, Bananero, Metro y Central Bolívar, presentes en torno al departamento de Antioquia.

Estas estructuras paramilitares, como señalan varios trabajos del CNMH (2008, 2009, 2010), van a erigirse como los grupos armados de mayor arraigo local y, por extensión, de mayor afectación a la guerrilla. Tanto, que el ELN termina por desaparecer, desde el año 2005 de la práctica totalidad de estos departamentos, y las FARC se mantienen, exclusivamente, en Antioquia y Bolívar. No obstante, y al respecto, conviene precisar que ni el Frente de Guerra Norte del ELN, ni los Bloques Caribe y José María Córdoba de las FARC se trataban de las estructuras más poderosas de las guerrillas<sup>6</sup>. Esto, en buena medida, por hacer parte de los vulgarmente denominados como “frentes pobres” y depender en sus finanzas mayormente del secuestro y la extorsión y menos del narcotráfico. Asimismo, ninguna de estas tres estructuras superaba los 1.000 combatientes, una cifra muy alejada de los casi 8.000 efectivos con los que contaba el paramilitarismo en la región.

Por ejemplo, buena cuenta de lo anterior daría el fenómeno recurrido de las masacres perpetradas por referidos bloques Héroes de Montes de María (14 masacres y 133 muertes violentas), Élmer Cárdenas (13 masacres y 70 víctimas), Bananero (6 masacres y 40 muertes), Norte (82 masacres y 598 víctimas mortales), Metro (47 masacres y 381 muertes) y Central Bolívar (28 masacres y 177 muertes). Masacres que, focalizadas en Antioquia y el norte del país, alcanzan la nada desdeñable cifra de 190 casos y 1.399 muertes violentas que evidencian el nivel de afectación sobre la población civil y, por extensión, sobre las comunidades de apoyo de las guerrillas en la región.

Finalmente, cabría señalar que lo descrito diferiría, en mucho, con la suerte que corrió el paramilitarismo en aquellos enclaves con mayor presencia guerrilleras como son el nororiente o el suroccidente. Así, el Bloque Catatumbo en Norte de Santander, el Bloque Vencedores de Arauca en Arauca, el Bloque Libertadores del Sur en Nariño y el Bloque del Sur en Putumayo, a diferencia de los casos anteriores, durante su intento de expansión, a inicios de la década pasada, sin embargo, no evidencian cambio alguno en los niveles de presencia territorial o activismo armado de las guerrillas.

Si bien es cierto que las AUC trataron de arrebatar el poder, principalmente a las FARC, en estos cuatro departamentos —nucleares en la estructura tanto de cultivo de coca como de conexión con los circuitos de distribución de coca y contra-

<sup>5</sup> Las 19 estructuras eran: 1) Bloque Suroeste Antioqueño, 2) Bloque Occidente Antioqueño, 3) Bloque Héroes de Tolová, 4) Bloque Míneros, 5) Bloque Norte, 6) Bloque Héroes de Granada, 7) Bloque Élmer Cárdenas, 8) Bloque Tolima, 9) Bloque Bananero, 10) Bloque Calima, 11) Bloque Cacique Nutibara, 12) Bloque Centauros, 13) Bloque Héroes del Chocó y Pacífico, 14) Bloque Montes de María, 15) Bloque La Mojana, 16) Bloque Córdoba, 17) Bloque Catatumbo, 18) Bloque Tayrona y finalmente, el 19) Bloque Héctor Julio Peinado Becerra.

<sup>6</sup> La única excepción, y con salvedades sub-regionales, la podía representar el departamento de Antioquia.

bando—, de otro lado, los escasos estudios existentes hasta el momento, como el de Ríos (2016b), más bien invitan a desestimar afectación o debilitamiento alguno de las estructuras guerrilleras allí presentes. Ello, porque los niveles de presencia o activismo se mantienen inalterados, cuando no crecientes y porque, en suma, confluye una suma de factores favorables para las guerrillas y que, planteados con anterioridad en este trabajo, son la clave para entender las dinámicas de enquistamiento y control local que los grupos guerrilleros mantienen en Colombia.

## Conclusiones

A tenor de lo todo anterior se pueden señalar varias conclusiones. La primera de ellas es que la *periferialización* del conflicto armado colombiano se debe entender desde una doble dimensión, tanto como oportunidad como riesgo.

Como oportunidad, porque a pesar de que se expulsa a la guerrilla de varios enclaves del país, por otro lado, la política beligerante de seguridad democrática no ha servido para poner fin a la lucha armada de unas guerrillas que han vuelto al tradicional mecanismo de *hit and run* de los setenta y principios de los ochenta. Es decir, el conflicto armado colombiano ha evolucionado a una suerte de “doble estancamiento doloroso” en el que ninguno de los dos actores involucrados, guerrilla y Estado, ha obtenido la victoria militar y, por ende, persistir en una continuidad prolongada de la guerra se puede entender como mutuamente insatisfactorio. Para las guerrillas, por quedar relegadas a condiciones nada comparables dos décadas atrás, y bajo una imposibilidad de aspirar a tomar el poder político por las armas. Para el gobierno, porque el éxito de los operativos militares se desdibuja por la incertidumbre de actuar sobre enclaves en los que el combate armado incorpora variables que favorecen la forma de combate de la guerrilla. Quizá esto sea fundamental para entender el proceso de negociación que tiene lugar con las FARC en La Habana y que, también, acaba de empezar con el ELN en Ecuador.

Como riesgo, porque si el gobierno colombiano prosigue en la inacción de políticas públicas que rompan la máxima de que “Colombia tiene más territorio que Estado”, las condiciones sociales y económicas que presentan los departamentos periféricos pueden suponer un sustento de gran valor, a efectos de mantener dinámicas de violencia que continúen más allá del acuerdo. Dicho de otro modo, en cuanto se firme el acuerdo con las FARC, previsto para las próximas semanas, y se resuelva el proceso con el ELN, el conflicto desactivará buena parte de la estructura guerrillera. Empero, si las condiciones socio-económicas mantienen la exclusión, la informalidad y la marginalidad como inalteradas, nada permite afirmar que no acontezca una redefinición de las lógicas de disputa violenta frente al Estado.

La experiencia comparada en Colombia es evidente. La desmovilización de 33.000 paramilitares de las AUC a partir de 2005, en prácticamente tres años, se había rediseñado a través del fenómeno de las Bandas Criminales (Bacrim) que, en tres años, ascendieron a integrar más de 5.000 efectivos, actuando bajo lógicas territoriales y criminales iguales que el paramilitarismo. Es más, cabe destacar una salvedad particular. La desideologización y la pérdida de su espíritu anti-subversivo supusieron la conexión de alianzas, antes impensables, con unas guerrillas a las que, tres años atrás, se habían enfrentado. Otro ejemplo lo brinda Centroamérica, donde la ausencia de políticas de transformación social, económica y

política han desembocado en que, tras procesos ejemplares de resolución de sus conflictos, como El Salvador, las dinámicas de violencia, redibujadas a través de las “maras”, hayan hecho de esta región la más violenta del mundo.

A todo lo anterior hay que sumar la ausencia de mecanismos de distribución de competencias, recursos y capacidades institucionales a los niveles sub-estatales de gobierno (departamentos y municipios) que apenas tienen capacidad para satisfacer sus necesidades locales. Esto conectaría directamente con el rezago de los indicadores sociales y económicos que en el suroccidente y el nororiente del país alimentan una profunda brecha social, puesta de manifiesto en este trabajo, y que es imprescindible para incentivar prácticas de construcción de tejido empresarial y tejido productivo. Ello, en la medida en que, en estas dos regiones, se concentran la mayoría de las 65.000 familias que subsisten gracias a los cultivos de coca. Cultivos que, tras cientos de miles de hectáreas asperjadas, desde hace tres años, vienen incrementándose paulatinamente, invitando a cuestionar la eficacia de las políticas reactivas frente a un problema con una dimensión humana que, hasta el momento, ha sido mayormente desatendida.

Todo lo expuesto termina reivindicando la Geografía Política como una excelente disciplina desde la que dimensionar el conflicto armado colombiano y sus posibles horizontes. Las nuevas dinámicas espaciales de la violencia y la conexión de un proceso de *periferialización* con cinco factores como son el arraigo guerrillero, la presencia de cultivos, la falta de presencia de las políticas de seguridad, la ingente violencia estructural o la concurrencia, o no, de paramilitarismo, son la clave para la comprensión del conflicto colombiano. No solo del porqué de sus nuevas lógicas espaciales de la violencia, sino de las posibles formas de superación o continuidad que la violencia directa derivada del conflicto puede experimentar una vez se firmen, muy previsiblemente, los acuerdos con las FARC y el ELN.

## Bibliografía

- Aguilera, Mario (2010) *Las FARC: la guerrilla campesina 1949-2010*. Bogotá: Arfo.
- Aponte, David, y Vargas, Andrés (2011) *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN*. Bogotá: CINEP.
- Arjona, Ana (2008) “Grupos armados, comunidades y órdenes locales: interacciones complejas”, en F. González (ed.) *Hacia la reconstrucción del país: Desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*. Bogotá: CINEP, 99-110.
- Bechara, Eduardo (2012) *¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia*. Bogotá: Universidad Externado.
- Bejarano, Ana María, y Pizarro, Eduardo (2001) “The Coming Anarchy: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring State Makers in Colombia”. *Workshop at the Punk Center of Internacional Relations*. Universidad de Toronto.
- Bejarano, Ana María, y Pizarro, Eduardo (2003) “Colombia: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring State-Makers”, en P. Kingston e I. Spears (eds.) *States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era*. Nueva York, Estados Unidos: Pallgrave McMillan, 99-118.
- Betancourt, Darío (1991) “Los cinco focos de la mafia colombiana (1968-1988). Elementos para una historia”. *Revista Folios*, núm. 2, 13-30.
- Blair, Elsa (1993) *Las fuerzas armadas. Una mirada civil*. Bogotá: CINEP.

- Burton, John (1990) *Conflict: Resolution and Provention*. Nueva York: St. Martin's Press.
- Cederman, Lars-Erik et al. (2013) "Transborder Ethnic Kin and Civil War". *International Organization*, vol. 67, núm. 2, 389-410.
- CNMH (2008) *La masacre de Trujillo. Una tragedia que no cesa*. Bogotá: CNMH.
- CNMH (2009) *El Salado. Esa guerra no era nuestra*. Bogotá: CNMH.
- CNMH (2010) *Bojayá. La guerra sin límites*. Bogotá: CNMH.
- CINEP (2010) *The Legacy of Uribe's Policies: Challenges for the Santos Administration*. Bogotá: CINEP.
- Cunningham, David et al. (2009) "It Takes Two: A Dyadic Analysis of Civil War Duration and Outcome". *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, núm. 4, 570-593.
- Departamento Nacional de Planeación (2006) "Balance Plan Colombia 1999-2005" [En línea. URL: <[https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Bal\\_plan\\_Col\\_espanol\\_final.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf)>. Consultado el 30 de junio de 2016].
- Drug Enforcement Administration (2015) *2015 Drug Threat Assesment Summary*. Washington: Department of Justice
- Duncan, Gustavo (2006) *Los señores de la guerra*. Bogotá: Planeta.
- Echandía, Camilo (1996) "La amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia". *Análisis Político*, núm. 27, 3-19.
- Echandía, Camilo (2006) *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*. Bogotá: Universidad Externado.
- Echandía, Camilo (2008) "El fin de la invulnerabilidad de las FARC. El estado actual del conflicto armado en Colombia". *Nueva Sociedad*, núm. 217, 4-13.
- Echandía, Camilo (2013) "Auge y declive del ELN. Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación". *Informes de la Fundación Ideas para la Paz*, núm. 21.
- Fals Borda, Orlando et al. (1962) *La Violencia en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- Galtung, Johan (2003a): *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao: Gernika Gogoratzuz.
- Galtung, Johan (2003b) *Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos*. México, D.F.: Transcend-Quimera.
- García de la Torre, Clara, y Aramburo, Clara (2011) *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños, 1990-2008*. Bogotá: CINEP.
- Gallardo, José (2005) *El Plan Colombia y sus efectos sobre Ecuador*. Quito: Esqueletra
- González, Fernán et al. (2012) *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*. Bogotá: CINEP.
- Henderson, James (2010) *Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Hernández, Milton (2006) *Rojo y Negro. Historia del ELN*. Tafalla: Txalaparta.
- Kalyvas, Stathis (2006) *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kalyvas Stathis; Shapiro, Ian, y Masoud, Tarek (2008) *Order, Conflict and Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leal, Francisco (1994) *El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- Medina, Carlos (1990) *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá"*. Bogotá: Editorial de Documentos Periodísticos

- Medina, Carlos (1996) *ELN: una historia contada a dos voces*. Bogotá: Rodríguez Quito Editores.
- Medina, Carlos (2008) *Ejército de Liberación Nacional. Notas para una historia de las ideas políticas*. [En línea. URL: <[http://www.cedema.org/uploads/Medina\\_Gallego\\_ELN.pdf](http://www.cedema.org/uploads/Medina_Gallego_ELN.pdf)>. Consultado el 5 de abril de 2016].
- Medina, Carlos (2011) *Las FARC-EP y ELN. Una historia comparada*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Miall, Hugh *et al.* (2015) *The Contemporary Conflict Resolution Reader*. Cambridge: Polity Press.
- MINDEFENSA (Ministerio de Defensa Nacional) (2005) *Logros y retos de la Política de Seguridad Democrática*. Bogotá.
- MINDEFENSA (Ministerio de Defensa Nacional) (2010) *Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Bogotá.
- MINDEFENSA (Ministerio de Defensa Nacional) (2011b) *Gasto en Defensa y Seguridad 1998- 2011*. Bogotá.
- Mitchell, Chris (1981) *The Structure of International Conflict*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Molano, Alfredo (1987) *Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare*. Bogotá: Áncora Editores.
- Observatorio Geopolítico de las Drogas (1996) *Informe Anual. Geopolítica Mundial de las Drogas*. París: OGD.
- Ocampo, Gloria Isabel (2014) *Poderes regionales, clientelismo y Estado*. Bogotá: CINEP.
- Oquist, Paul (1978) *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.
- Otero, Diego (2010) *El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Palacio, German, y Rojas, Fernando (1990) “Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia”, en G. Palacio (ed.) *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*. Bogotá: ILSA-CEREC, 69-104.
- Pécaut, Daniel (2008) *Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines?* Bogotá: Norma.
- Piña, Efrén (2012) *Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la frontera*. Bogotá: CINEP.
- Pizarro, Eduardo (2004) *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Norma.
- Pizarro, Eduardo (2011) *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*. Bogotá: Norma.
- PNUD (2003) *Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia. El conflicto, callejón con salida*. Nueva York: Naciones Unidas.
- Presidencia de la República (2007) *Informe al Congreso* [En línea. URL: <[http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe\\_congreso\\_2007-AUV.pdf](http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe_congreso_2007-AUV.pdf)>. Consultado el 3 de abril de 2016].
- Presidencia de la República (2010) *Informe al Congreso*. [En línea. URL: <[http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe\\_congreso\\_2010.pdf](http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe_congreso_2010.pdf)>. Consultado el 3 de abril de 2016].

- Ramírez, María (2009) “Negotiating Peace and Visibility as a Civil Society in Putumayo amid the Armed Conflict and the War on Drugs”, en V. M. Bouvier (ed.) *Colombia. Building Peace in Time of War*. Washington: United States Institute of Peace, 311-334.
- Ramírez, Juan *et al.* (2014) “Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia, 2012-2013”. Serie de la CEPAL *Estudios y Perspectivas*, núm. 27.
- Rangel, Alfredo y Medellín, Pedro (2010) *La Política de Seguridad Democrática*. Bogotá: Norma.
- Restrepo, Jorge Alberto (2006) “El Conflicto en Colombia: ¿Quién hizo qué a quién? Un Enfoque Cuantitativo (1988-2003)”, en F. Gutiérrez *et al.* (eds.) *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma, 505-542.
- Reyes, Alejandro (1993) *Geografía de la violencia en Colombia. Informe de investigación*. Bogotá: IEPRI.
- Reyes, Alejandro (2009) *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Norma.
- Ríos, Jerónimo (2016a) “La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN”. *Revista UNISCI*, núm. 41, 205-233.
- Ríos, Jerónimo (2016b) *Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Rodríguez Cuadros, José Darío (2015) *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense*. Bogotá: CINEP.
- Rojas, Diana (2015) *El Plan Colombia. La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)*. Bogotá: Debate.
- Romero, Mauricio (2003) *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*. Bogotá: Planeta.
- Ronderos, Teresa (2014) *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Aguilar.
- Rotberg, Robert (2004) *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton: Princeton University Press.
- Salas, Luis (2007) “Identificación de patrones espaciales de la confrontación armada en Colombia con el Método de Densidades Focales Kernel”. *Perspectiva Geográfica*, núm. 12, 37-70.
- Salas, Luis (2010) “Corredores y territorios del conflicto armado colombiano: una prioridad en la geopolítica de los actores armados”. *Perspectiva Geográfica*, núm. 15, 9-36.
- Salas, Luis (2015) “Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012”. *Cuadernos de Geografía*, vol. 24, núm. 1, 157-172.
- Salehyan, Idean (2007) “Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary for Rebel Groups”. *World Politics*, vol. 59, núm. 2, 217-242.
- Sánchez, Gonzalo ([1987] 2009) *Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios para la Violencia*. Bogotá: La Carreta.
- Tickner, Arlene (2007) “Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales”. *Colombia Internacional*, núm. 65, 90-111.
- Tokatlian, Juan (2001) “El Plan Colombia: ¿un modelo de intervención?”. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, núm. 54, 203-219.
- Tollefsen, Andreas Forø, y Buhaug, Halvard (2015) “Insurgency and Inaccessibility”. *International Studies Review*, vol. 17, núm. 1, 6-25.
- Torres, María Clara (2011) *Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo*. Bogotá: CINEP.



- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2015) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2013*. Viena: Naciones Unidas.
- Valencia, León (2002) *Adiós a la política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz*. Bogotá: Intermedio.
- Vásquez, Teófilo *et al.* (2011) *Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*. Bogotá: CINEP.
- Vélez, María (2001) “FARC-ELN: evolución y expansión territorial”. *Desarrollo y Sociedad*, núm. 47, 151-225.
- Zukerman, Sarah (2012) “Organizational legacies of violence: Conditions favoring insurgency onset in Colombia, 1964-1984”. *Journal of Peace Research*, vol. 49, núm. 3, 473-491.